

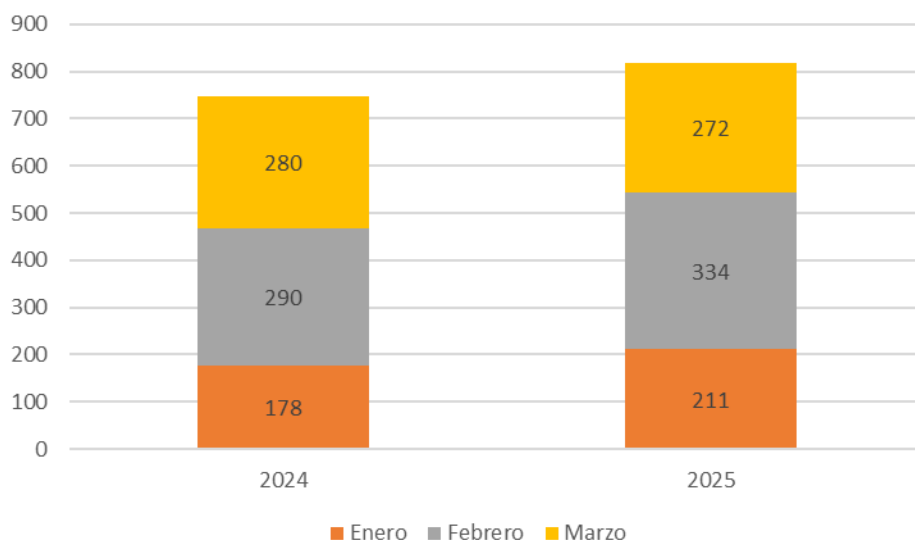
Informe Trimestral de Conflictos Sociales Manifiestos (enero -marzo de 2025)

Panorama General – enero- marzo 2025

Desde enero de 2022 la Defensoría del Pueblo, a través del Observatorio de la Conflictividad Social, realiza un registro de eventos de conflictos sociales manifiestos a través del monitoreo de las manifestaciones públicas y las protestas sociales ocurridas en el territorio nacional (marchas, movilizaciones, plantones, concentraciones, huelgas, cese de actividades, paros, bloqueos, entre otros).

Estos eventos tienen por causa la falta de solución o aparición de problemas sociales e insatisfacciones de derechos que afectan a un sector de la población y que requieren ser atendidas, principalmente por el Estado.

Gráfica. 1. Eventos de conflictos sociales manifiestos, comportamiento enero, febrero, marzo 2024-2025



Fuente datos: Defensorías Regionales Defensoría del Pueblo, medios de comunicación masiva
Procesado: Observatorio de Conflictividad Social, Defensoría del Pueblo, datos susceptibles de modificación por actualización de la base de datos.

De acuerdo con la información procesada y sistematizada por el Observatorio que coordina la Defensoría Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, durante los primeros tres meses de 2025 se registraron 817 eventos que son manifestación de la existencia de conflictos sociales, lo que representa un incremento del 9% en relación con el primer trimestre de 2024 cuando se registraron 748 conflictos sociales originados por reclamaciones en materia derechos laborales, la presencia e inversión estatal y el derecho a la educación.

Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 11 eventos de carácter nacional, entre los que sobresalen los siguientes:

- Las movilizaciones de pacientes y trabajadores de la salud. La manifestación de esta conflictividad social ha sido generada por la falta de medicamentos esenciales, fallas en la prestación de servicios médicos y la falta de pagos

oportunos a los profesionales de la salud. En efecto el 29 de enero de 2025, usuarios, pacientes y profesionales de la salud realizaron una protesta simbólica, suspendiendo actividades durante cinco minutos para visibilizar la crisis en el sector y exigir soluciones inmediatas a las autoridades nacionales.

- El 12 marzo de 2025, se realizaron plantones en diversas ciudades para exigir mejoras en la prestación del servicio y la falta de entrega de medicamentos en Cali, Medellín y Bogotá. A su vez, la Defensoría del Pueblo a través de su Delegada para el Derecho a la Salud alertó sobre el deterioro del sistema de salud, señalando un aumento significativo en las quejas por fallas en la atención médica y escasez de medicamentos y solicitó al Ministerio de Salud adoptar medidas urgentes para garantizar el derecho fundamental a la salud en todo el país¹.
- En lo que respecta al sector agrícola, desde el 17 de febrero de 2025, productores arroceros de Huila iniciaron jornadas de protesta ante la presunta falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional frente a la crisis que atraviesa el sector. Durante esos días, también se sumaron campesinos afiliados a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), quienes realizaron movilizaciones el 19 de febrero en respaldo a la reforma agraria y al denominado “Pacto por la Tierra y la Vida”.
- La situación del sector arrocero se agudizó entre el 3 y el 12 de marzo, cuando se convocó a un paro nacional con bloqueos intermitentes en departamentos como Tolima, Meta, Córdoba, Cesar, Santander, Norte de Santander, Huila, Casanare y en el sector de la Mojana sucreña. En estas jornadas, los productores expresaron su preocupación por los bajos precios del arroz paddy. Entre las principales exigencias se encontraban la implementación de medidas urgentes para estabilizar los precios, la regulación de la producción a nivel nacional y una inversión significativa en infraestructura de riego.

Se debe mencionar que los productores de arroz han manifestado su inconformidad por el presunto incumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional el 12 de marzo en la ciudad de El Espinal, Tolima. Según lo expresado por sus voceros, los compromisos adquiridos durante esa jornada —que incluían medidas clave para atender la crisis del sector— no han sido ejecutados a la fecha. Esta situación ha generado un creciente descontento entre los productores, quienes advierten que, de no cumplirse lo pactado, podrían retomarse las movilizaciones en el corto plazo.

- A su vez, durante el trimestre se presentaron diversas movilizaciones ciudadanas relacionadas con la defensa de los derechos a la paz, la seguridad y la vida. En varias ciudades del país se realizaron jornadas de intervención artística con murales en honor a las madres que buscan a las víctimas de desaparición forzada en el sector conocido como *La Escombrera*, en la ciudad de Medellín, bajo el lema “Las Cuchas tienen razón”.
- Debido a la crisis humanitaria que se ha presentado en los primeros meses del año en la región del Catatumbo, se han llevado a cabo manifestaciones de solidaridad con sus pobladores y en rechazo a la violencia. Entre éstas, el 30 de enero, docentes y sindicatos se manifestaron en diferentes regiones del país para exigir garantías de seguridad y el cese de la violencia en esta región.

¹ Defensoría del Pueblo, Radiografía de la Defensoría del Pueblo sobre la crisis en el sistema de salud, 26 de marzo de 2025. <https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/radiograf%C3%ADa-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-sobre-la-crisis-en-el-sistema-de-salud?redirect=%2F>

- El 18 de marzo de 2025, miles de ciudadanos se movilizaron en diversas ciudades de Colombia en respaldo a las reformas propuestas por el Gobierno Nacional y en apoyo a la convocatoria de una consulta popular que surge ante las dificultades que ha tenido el ejecutivo para lograr un trámite exitoso de sus reformas en el legislativo. Las manifestaciones, tuvieron lugar en las principales ciudades del país y fueron convocadas por el presidente de la República.
- Por último, en diferentes ciudades del país se realizaron marchas para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Este año se cumplió el 50 aniversario de la instauración por la ONU del Día Internacional de la Mujer, y se conmemoró el 30° aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que impone retos a las naciones para garantizar el avance en los derechos de las mujeres. Igualmente, este 8 de marzo fue una nueva oportunidad para rechazar los hechos de violencia de género y exigir justicia y garantías de seguridad.

Por otra parte, cabe resaltar que, si bien las manifestaciones del sector minero no se desarrollaron a escala nacional, representaron una expresión de inconformidad regional, que convocó la atención de diferentes niveles gobierno.

En efecto, durante los primeros meses de 2025, se intensificaron las tensiones en torno a la minería ancestral, informal y artesanal en diferentes zonas del país, especialmente en el Nordeste antioqueño y Santander. Las protestas iniciaron con bloqueos en vías como Porce-Yolombó y Zaragoza, motivadas por operativos de la fuerza pública y la destrucción de maquinaria minera. A esto se sumaron reclamos por el incumplimiento de compromisos pactados en años anteriores, como lo denunció la Mesa Minera del Nordeste Antioqueño, que convocó un paro el 27 de febrero en municipios como Anorí, Segovia, Amalfi, Remedios y Porce, donde mineros exigieron la formalización del sector, condiciones dignas de trabajo y garantías para el ejercicio de su actividad tradicional.

En paralelo, comunidades de Santander rechazaron la Resolución 0221 de marzo de 2025, mediante la cual el Ministerio de Ambiente declaró una zona de reserva temporal en Santurbán, afectando más de 74 mil hectáreas. Esto provocó que habitantes del municipio de Vetas se declararan en desobediencia civil y que organizaciones mineras entregaran un documento con 8.000 firmas en protesta por lo que consideran una medida inconsulta y con deficiencias técnicas y jurídicas.

La situación en el nordeste Antioqueño escaló el 24 de marzo, cuando en el corregimiento de Porce se inició un paro indefinido por parte de los mineros del Nordeste, quienes denunciaron no solo el incumplimiento de los acuerdos, sino también atropellos por parte de la Fuerza Pública. En conjunto, estos hechos reflejan un profundo malestar del sector minero informal frente a las políticas de control, regulación ambiental y la falta de inclusión en los procesos de diálogo.

Igualmente, entre otros conflictos que se observaron durante el primer trimestre, se reseñan:

- En el tema laboral, uno de los conflictos más visibles en los primeros meses de 2025 fue el generado por las movilizaciones de madres comunitarias, contratistas y trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), debido a las demoras en la contratación de los operadores de los Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Esta situación no solo afectó los ingresos y condiciones laborales de quienes prestan este servicio, sino que también impactó el derecho al cuidado y atención integral de niños y niñas menores de cinco años, lo que motivó a su vez manifestaciones por parte de padres y madres de familia, exigiendo la agilización de los trámites administrativos.

- Habitantes de los municipios de Soplaviento (Bolívar) y Manatí (Atlántico) llevaron a cabo un bloqueo en el Canal del Dique, en protesta por el presunto incumplimiento del Gobierno Nacional en la ejecución del megaproyecto destinado a prevenir inundaciones en estas localidades. Los manifestantes expresaron su preocupación por la vulnerabilidad de la región ante eventuales desbordamientos, especialmente considerando las afectaciones sufridas en temporadas de lluvias anteriores. Exigieron a las autoridades competentes la pronta reactivación y cumplimiento de los compromisos adquiridos para la implementación de las obras de mitigación necesarias.
- Durante los primeros meses de 2025, se registraron movilizaciones por parte de firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, exigiendo el cumplimiento integral de los compromisos pactados. El 3 y 4 de febrero, el Frente Nacional de Paz Colectivo, conformado por excombatientes de diversos departamentos, convocó a bloqueos intermitentes en las principales vías de acceso a Bogotá, buscando la atención del Gobierno Nacional para abordar temas relacionados con seguridad, acceso a tierras y garantías en el proceso de reincorporación. Posteriormente, el 17 y 18 de febrero, se llevó a cabo un bloqueo en la vía Girardot-Bogotá, específicamente en el kilómetro 42, sector del Boquerón.
- Durante el primer trimestre de 2025 persistieron los conflictos sociales en torno al sector transporte, especialmente por el descontento de comunidades, transportadores, taxistas y camioneros frente al cobro de peajes, el alza en combustibles, las restricciones viales y presuntos incumplimientos por parte de autoridades locales y nacionales. Resaltan las protestas ciudadanas en distintos puntos del país en contra del cobro de peajes, especialmente aquellos administrados por la concesionaria Autopistas del Caribe y supervisados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En municipios como Sabanagrande, Baranoa, Turbaco y San Luis de Gaceno se han realizado bloqueos, plantones, marchas, medidas con riesgo a la integridad como encadenamientos y medidas simbólicas como el levantamiento de las varas. En San Luis de Gaceno, por ejemplo, las manifestaciones han sido sostenidas, superando los 100 días de protesta contra el cobro de \$19.100. En otros casos, como el del peaje de Ocoa o Puente Amarillo (Villavicencio-Restrepo), se han reportado intervenciones de la fuerza pública para evitar ocupaciones o contener bloqueos.

- En paralelo, taxistas y transportadores han protestado contra la informalidad, la falta de control al transporte ilegal, las fotomultas, la implementación de pico y placa, y el incremento en costos operativos. También se han presentado bloqueos en vías estratégicas como la Vía Panamericana, la Ruta del Sol, la vía al Llano y la Transversal del Sisga.
- Diversas comunidades han protagonizado manifestaciones debido al incumplimiento o retraso en acuerdos por parte de entidades nacionales y departamentales, lo que subraya la necesidad de una atención inmediata para evitar la escalada de conflictos.

En ese sentido, durante los primeros meses de 2025, se registraron diversas manifestaciones por parte de comunidades campesinas e indígenas, así

como, por habitantes de distintas ciudades como Bolívar, La Guajira, Bogotá, Boyacá, Huila, Norte de Santander, Sucre, Valle del Cauca, entre otros. Las protestas incluyeron bloqueos de vías, plantones y movilizaciones, en reclamo de mejoras en infraestructura, acceso a tierras, agua, educación, reubicación y respeto por los territorios ancestrales.

- También durante este periodo, se han registrado múltiples manifestaciones en distintas regiones del país en rechazo a la violencia de género, los feminicidios y la violencia sexual. Estas acciones han incluido velatones, marchas, plantones y expresiones culturales lideradas por organizaciones de mujeres, colectivos feministas, comunidad LGBTIQ+ y ciudadanía en general.

Casos como los presuntos feminicidios de Ruth María Ospina, Wendy Martínez, Sandra Patricia Zambrano, Alexsandra Sharit Ciro, Tailyn Valencia y Emily Villavalba han motivado manifestaciones en busca de justicia y no impunidad. También se ha exigido acción institucional frente a abusos sexuales denunciados en entornos escolares, como en Kennedy y San Cristóbal, así como en el caso de la niña Sofía Delgado en Villagorgona.

- Distintas comunidades indígenas, afrodescendientes y organizaciones sociales han desarrollado movilizaciones en defensa de sus derechos territoriales, el cumplimiento de acuerdos y el respeto a los procesos de consulta previa. Por ejemplo, la Organización Regional Convite Étnico, Ecológico y Social por la Vida Digna, la Resistencia y la Paz manifestó su inconformidad ante el incumplimiento de compromisos por parte del Ministerio del Interior, mientras que el Comité de la Hora Cero, en el contexto del pozo SIRIUS 2, se declaró en asamblea permanente exigiendo ser reconocidos como epicentro del proyecto y sujetos de consulta.

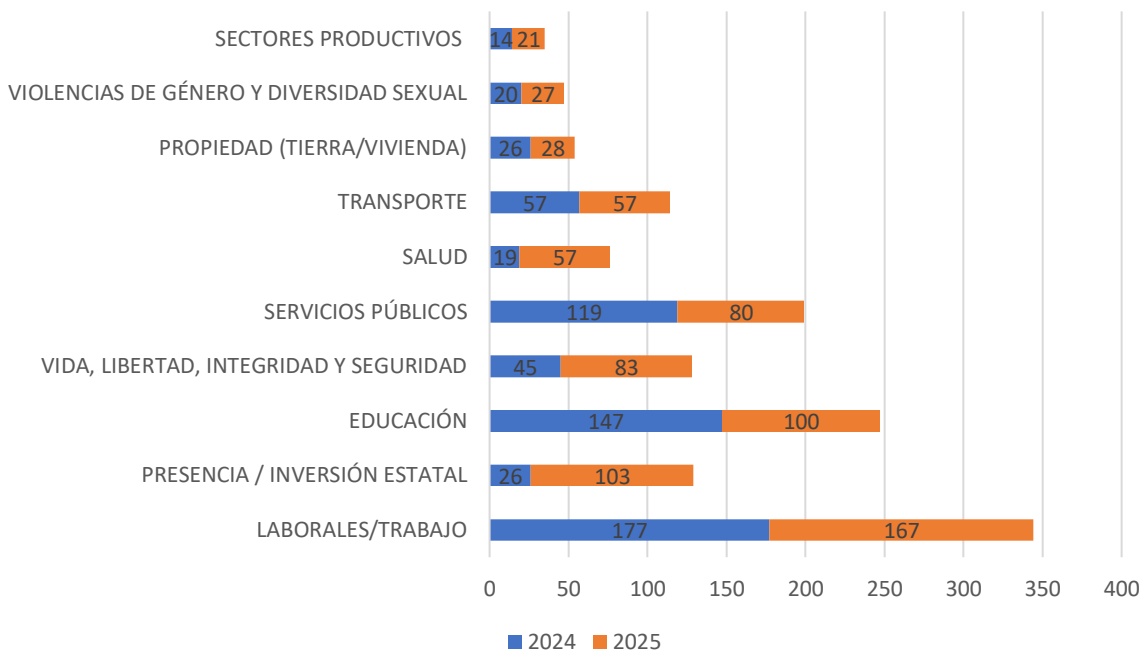
La comunidad Wayuú adelantó bloqueos en la línea férrea del Cerrejón, exigiendo respeto a su autoridad tradicional. Estos hechos reflejan una creciente demanda por participación efectiva, respeto a la autonomía territorial y cumplimiento de compromisos institucionales hacia los pueblos étnicos y comunidades.

- El sector educativo ha estado marcado por una alta conflictividad social derivada de problemáticas estructurales como la falta de docentes, transporte escolar, infraestructura deficiente, retrasos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), y decisiones administrativas sin consulta a las comunidades. Estudiantes, docentes, padres y madres de familia han realizado plantones, bloqueos, asambleas permanentes, marchas y ceses de actividades en instituciones educativas rurales y urbanas. Casos recurrentes como el cierre de sedes, la ausencia de personal docente y administrativo, la no prestación de transporte escolar y el deterioro de instalaciones han desencadenado protestas sostenidas en departamentos como Huila, Atlántico, Valle del Cauca, Putumayo, La Guajira, Chocó y Cundinamarca. Además, controversias como la construcción de un centro de inteligencia artificial en el colegio CASD en Barrancabermeja han generado protestas estudiantiles prolongadas. Por otra parte, las universidades públicas, como la Universidad Tecnológica del Chocó, Universidad Nacional, Universidad de Caldas y Unitrópico se han manifestado por presupuesto, condiciones de práctica, transporte y falta de atención por parte del Ministerio de Educación.

Caracterización de los Conflictos Sociales Manifiestos entre enero y marzo de 2025

Como se indicaba, los conflictos identificados en el trimestre de enero a marzo del año 2025 estuvieron relacionados, principalmente con demanda de derechos laborales (20%), demandas de inversión o presencia estatal (13%), por la garantía del derecho a la educación (12%), por la garantía de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad (10%), por fallas en la prestación de servicios públicos domiciliarios (10%), por la garantía del derecho a la salud (7%), por la implementación de medidas o políticas de transporte (7%), por la propiedad sobre la tierra o el derecho a la vivienda (3%), en rechazo a acciones de violencias basadas en género y contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas - OSIGD(3%), por situaciones que afectan a diversos sectores productivos (3%), entre otros conflictos sociales², los cuales, en sumatoria agrupan el 12% restante y tienen una participación individual ente el 1 y 2%.

Gráfica 2. Principales tipos de conflictos sociales en el trimestre de enero a marzo de 2024 y 2025



Fuente datos: Defensorías Regionales Defensoría del Pueblo, medios de comunicación masiva
Procesado: Observatorio de Conflictividad Social, Defensoría del Pueblo, datos susceptibles de modificación por actualización de la base de datos.

En comparación con el primer trimestre del año anterior, en 2025 se destaca un aumento en los eventos relacionados con temas tributarios, en particular el impuesto predial (400%) con conflictos carcelarios (400%), estos últimos afines a la persistencia de situaciones en las que se evidencia la vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad de establecimientos como La Picota, el Buen Pastor, la cárcel de Jamundí y la cárcel San Isidro de Popayán. También se observaron altas variaciones en los eventos relacionados con la presencia e inversión estatal (296%) y por el derecho a la salud (200%).

Zona Geográfica donde se registraron los conflictos sociales manifiestos:

La totalidad de eventos registrados durante el primer trimestre del año ocurrieron en 276 municipios de los 30 departamentos³ y el Distrito Capital. Los lugares en los que ocurrieron con mayor frecuencia fueron Bogotá (13%), Santander (6%), Antioquia (6%), Valle del Cauca (6%), Bolívar (5%), Atlántico (5%), Huila (5%), Córdoba (4%), Magdalena (4%) y Norte de

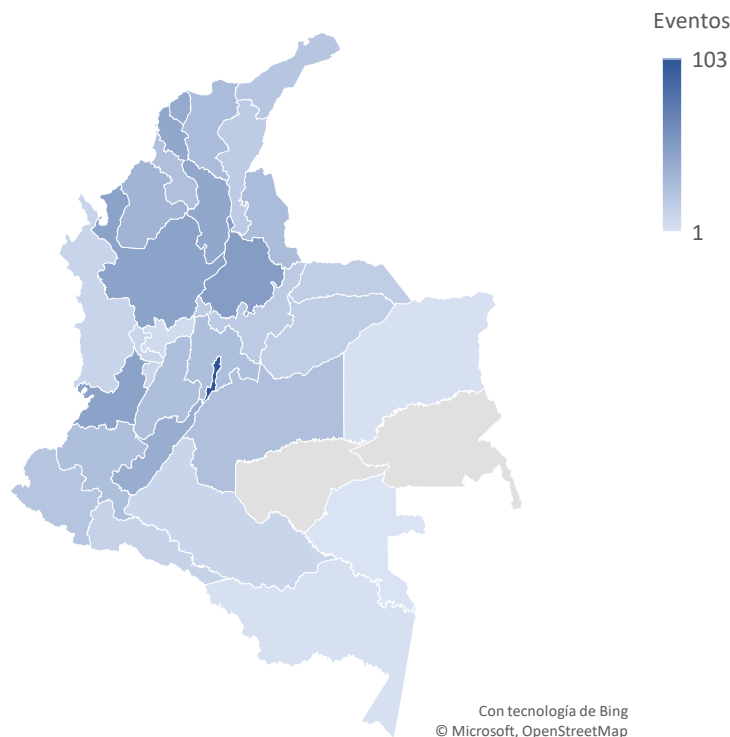
² Otros tipos de conflictos sociales hace referencia a la agrupación de tipos de conflictos que representaron valores pequeños entre (1-2%), lo anterior, para facilitar la lectura del documento.

³ No se conoció de eventos en Guainía y Guaviare.

Santander (4%). Los departamentos restantes concentraron una participación entre 1% y 3%, de los eventos en cada uno.

En relación con el mismo periodo del año anterior, en 2025 el número de eventos aumentó en 18 departamentos y en Bogotá. Entre los departamentos en los que se observaron incrementos en estos periodos sobresalen Putumayo, Quindío, Nariño, y Caquetá.

Mapa 1. Principales conflictos sociales manifiestos en el trimestre de enero a marzo de 2025, por departamento



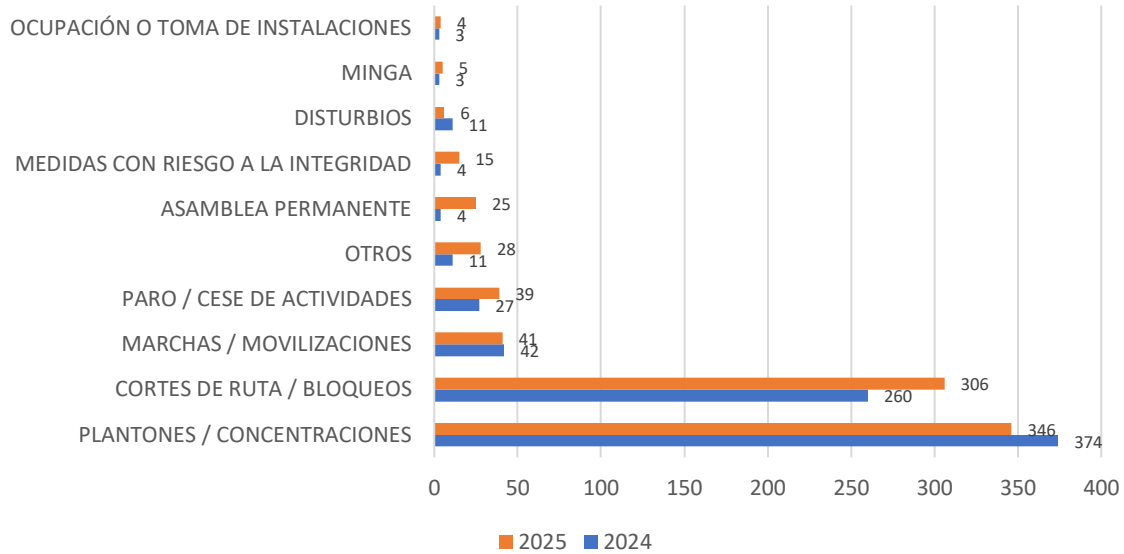
Fuente datos: Defensorías Regionales Defensoría del Pueblo, medios de comunicación masiva

Procesado: Observatorio de Conflictividad Social, Defensoría del Pueblo, datos susceptibles de modificación por actualización de la base de datos.

Mecanismos más usados por la población para expresar su inconformidad social:

En los hechos observados durante este primer trimestre de 2025, los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción o inconformidad por acciones u omisiones del Estado o de particulares fueron los plantones o concentraciones (42%), los bloqueos o cortes de rutas (37%), las marchas o movilizaciones (5%), paros o ceses de actividades (4%), entre otros que en sumatoria corresponden al 10% restante.

Gráfica 3. Principales tipos de manifestaciones de conflictos sociales en el trimestre de enero a marzo de 2024 y 2025



Fuente datos: Defensorías Regionales Defensoría del Pueblo, medios de comunicación masiva

Procesado: Observatorio de Conflictividad Social, Defensoría del Pueblo

Los actores que se manifestaron fueron principalmente la ciudadanía en general (26%), la comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres de familia) (17%), trabajadores y sindicatos (13%), usuarios de servicios públicos (9%), usuarios del sistema de salud (5%), comunidades indígenas (5%), transportadores (5%), trabajadores del sector salud (3%), sector agropecuario y campesinos (2%), mujeres (2%) entre otros actores que suman el 12% restante.

Espacios de diálogo en los que participó la Defensoría del Pueblo

Finalmente, durante el primer trimestre de 2025 desde el Observatorio de Conflictividad Social se identificó la participación de la Defensoría del Pueblo, a través de sus regionales y Delegadas, en 70 espacios de diálogo social en los que contribuyó como mediador o acompañante de las partes en conflicto.

Conclusiones

- Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 817 eventos que son manifestación de la existencia de conflictos sociales en el territorio nacional. En relación con el año 2024, se observó un incremento de 9% de los eventos.
- Los eventos monitoreados durante este trimestre mantuvieron una tendencia al alza. Siendo febrero el mes que concentró un mayor número de eventos.
- Durante este primer trimestre sobresalieron conflictos por temas laborales, presencia e inversión estatal y el derecho a la educación, sin embargo, los mayores incrementos de un año a otro se observaron en conflictos por temas tributarios, los derechos de la población privada de la libertad, y por las afectaciones al derecho a la salud.
- Durante los primeros tres meses del año, se destaca la participación en los eventos de conflictividad social de la ciudadanía en general, la comunidad educativa, los usuarios de servicios públicos, los usuarios del sistema de salud, las comunidades indígenas, los transportadores, trabajadores del sector salud, el sector agropecuario y campesinos, las mujeres, entre otros.
- Durante este trimestre, los ciudadanos utilizaron diversos mecanismos para expresar su inconformidad por acciones u omisiones del Estado o de

particulares. Los más empleados fueron los plantones o concentraciones, los bloqueos/cortes de ruta, las marchas o movilizaciones y los paros o cese de actividades, los disturbios o manifestaciones disruptivas violentas tuvieron una participación del 1%. En consecuencia, la mayoría de las expresiones de los conflictos sociales son manifestaciones de carácter pacífico y en una menor proporción se presentó una escalada a situaciones de violencia.

- La totalidad de eventos registrados en el primer trimestre ocurrieron en 276 municipios de 30 departamentos y el Distrito Capital. Este último concentró aproximadamente el 13% de todos los eventos de conflictos sociales registrados a nivel nacional.
- La dinámica de conflictividad social durante el primer trimestre de 2025 es originada por la persistencia de las tensiones políticas que se viven en el país, las cuales se vieron impactadas durante estos meses por las dificultades en el trámite en el Congreso de diversas reformas del actual gobierno, lo que llevó a varios llamados tanto del gobierno como a la oposición para movilizarse en las calles.
- Igualmente, se observaron importantes manifestaciones de conflictos sociales, los cuales habrían logrado reducirse mediante el diálogo en los años 2023 y 2024, pero donde los actores consideran que se han presentado incumplimientos por parte de las autoridades, lo que llevó a nuevos escenarios de manifestación durante la presente anualidad.
- Respecto a lo anterior, se mantienen latente la insatisfacción de los transportadores de carga frente al cumplimiento de los acuerdos pactados en septiembre de 2024, existen tensiones posibles nuevas alzas al ACPM.
- También persiste el descontento generalizado en torno al cobro de peajes, reflejado en bloqueos, plantones y jornadas de protesta lideradas por movimientos ciudadanos y comités cívicos en varias regiones del país.
- En el sector minero, se ha consolidado como un conflicto social regional significativo, especialmente en el Nordeste antioqueño y en Santander, donde mineros ancestrales e informales han realizado paros, marchas y bloqueos en rechazo a operativos, políticas ambientales y falta de cumplimiento de acuerdos. Las exigencias se centran en la formalización, el respeto por la tradición minera y el derecho a la participación.
- Igualmente, en varias regiones del país, comunidades campesinas e indígenas han protestado por el incumplimiento de acuerdos por parte de entidades estatales, lo que refleja una crisis de confianza institucional. La ausencia de respuestas oportunas ha generado un riesgo creciente de escalamiento de los conflictos locales.
- Sumado a lo anterior, preocupa la crisis humanitaria que se vive en diferentes regiones del país como consecuencia del incremento del accionar de actores armados ilegales, lo que obliga a diferentes actores sociales a movilizarse exigiendo acciones del Estado que garanticen su vida, integridad y seguridad en los territorios.
- Por otra parte, las mujeres, niñas y personas OSIGD han liderado movilizaciones en rechazo a los feminicidios, transfeminicidios, violencias basadas en género y la impunidad en casos de abuso sexual. El 8M fue un punto de articulación nacional de estas demandas, sumadas a exigencias por igualdad y justicia para las víctimas.